

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 1
CARTAGENA

SENTENCIA: 00178/2020

-

Modelo: N11600
PLAZA DOCTOR VICENTE GARCIA MARCOS, 3-BAJO
Teléfono: 968506838 Fax: 968529166
Correo electrónico: contenciosol.cartagena@justicia.es

████████████████████
PROCURADORA

RECIBIDO VIA LEXNET 10/11/2020

Equipo/usuario: N67

████████████████████
Procedimiento: PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000187 /2019 /
Sobre: ADMINISTRACION LOCAL
De D/D^a: ██████████
Abogado: ██████████
Procurador D./D^a:
Contra D./D^a AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO
Abogado: ██████████
Procurador D./D^a ██████████

SENTENCIA N° 178

En CARTAGENA, a nueve de noviembre de dos mil veinte.

Vistos los autos de **procedimiento abreviado número 187/2019**, seguidos a instancias de D. ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ representado y asistido por el Letrado Sr. ██████████ ██████████, contra el Ayuntamiento de Torre Pacheco, representado por la Procuradora Sra. ██████████ ██████████ y asistido de la Letrada Sra. ██████████ ██████████, en sustitución del Letrado Sr. ██████████ ██████████ ██████████, sobre personal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En este Juzgado se recibió recurso contencioso administrativo interpuesto por D. ██████████ ██████████ en el que se interesa se declare contrario a derecho el Decreto de la Alcaldía de Torre Pacheco de fecha 22 de abril de 2019 por el que se desestima recurso de reposición frente a Decreto de fecha 12 de marzo de 2019 por el que se deniega al actor la indemnización por jubilación anticipada prevista en el Acuerdo Marco sobre condiciones de trabajo entre el Ayuntamiento de Torre Pacheco y su personal funcionario de fecha 16 de septiembre de 2006.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se reclamó el correspondiente expediente administrativo, señalándose para la

celebración de la vista el día 5 de noviembre de 2020 a las 11:30 horas. En el acto de la vista, el demandante se ratificó en la demanda, y por la parte demandada se interesó la desestimación del recurso. Recibido el procedimiento a prueba y tras la admisión y práctica de la admitida y del trámite de conclusiones, quedó el juicio visto para sentencia.

TERCERO.- La cuantía del procedimiento fue fijada en 6.010,12 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo el Decreto de la Alcaldía número 864/2019 de fecha 22 de abril de 2019 por el que se desestima recurso de reposición interpuesto por el actor frente a Decreto de fecha 12 de marzo de 2019 por el que se deniega al actor la indemnización por jubilación prevista en el Acuerdo Marco sobre condiciones de trabajo entre el Ayuntamiento de Torre Pacheco y su personal funcionario para el año 2006 y en concreto prevista en su artículo 26.7.

Alega en síntesis la parte demandante, que la resolución que se recurre vulnera el artículo 26.7 aludido. Que el demandante se ha jubilado de manera voluntaria y anticipada tal y como prevé dicho precepto. Que la administración no ha llevado a cabo o iniciado procedimiento alguno de revisión de sus propios actos por lo que no puede dejar de aplicar unas condiciones que ella misma ha suscrito. Aporta a título ilustrativo Sentencias de este Juzgado y del JCA número 2, 3 y 6 de Murcia para supuestos que refiere análogos al aquí planteado y Sentencia del TSJ del País Vasco, Sala de lo Contencioso Administrativo.

En fase de conclusiones el letrado de la parte recurrente denuncia la existencia de desviación procesal en la contestación a la demanda, ya que el Decreto impugnado denegaba la indemnización solicitada sobre la base de que no era jubilación anticipada sino ordinaria, mientras que en sede de contestación oral a la demanda interpuesta invoca la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la naturaleza retributiva de aquélla.

Por su parte el Letrado Consistorial defiende en síntesis que el abono reclamado por el actor es contrario a la legalidad ordinaria y sin cobertura ya que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en concreto la fijada por las sentencias de fecha 20 de marzo de 2018 y mantenida posteriormente por la de 14 de marzo de 2019 han establecido que dichos premios tienen naturaleza retributiva y no asistencial y por tanto infringen lo dispuesto en la normativa de rango legal que prevalece sobre la reglamentaria.

SEGUNDO.- La controversia jurídica aquí planteada ha sido ya resuelta en sentencias de este mismo Juzgado de fecha 18 y

26 de octubre de 2020 en las que se establecen: "Ahora bien, la controversia sobre la naturaleza jurídica de dicha ayuda o premio es la que ha sido resuelta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en las sentencias aludidas por la parte demandada. Así la STS número 458/2018 de 20 marzo, establece "En cambio, con anterioridad la misma Sección Séptima ha hecho pronunciamientos expresamente dirigidos a los premios de jubilación y ha señalado que no son conformes a Derecho. Así, la de 9 de septiembre de 2010 (casación n.º 3565/2007), con cita de las anteriores de 18 de enero de 2010 (casación n.º 4228/06) y de 12 de febrero de 2008 (casación n.º 4339/2003) ha dicho que esos premios infringen la disposición adicional cuarta del Real Decreto Legislativo 781/86 y la disposición final segunda de la Ley reguladora de las bases de régimen local y no se pueden amparar en el artículo 34 de la Ley 30/1984 porque no atienden a los supuestos previstos en el precepto pues no son retribuciones contempladas en la regulación legal, ni un complemento retributivo de los definidos en el artículo 5 del Real Decreto 861/1984 y tampoco se ajustan a las determinaciones del artículo 93 de la Ley reguladora de las bases del Régimen Local .

Desde luego, como dice la sentencia de 20 de diciembre de 2013 (casación n.º 7680), no están excluidas de la negociación que contempla el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público las cuestiones relacionadas con las clases pasivas ni con los funcionarios jubilados. Es igualmente verdad que toda medida asistencial puede comportar costes económicos y que eso no significa que deban ser consideradas todas retribuciones. No obstante, entiende la Sala que los premios de jubilación previstos en los artículos 21 y 22 del Acuerdo de 26 de abril de 2011 del pleno del Ayuntamiento de Icod de Los Vinos no son medidas asistenciales.

Se trata de remuneraciones distintas de las previstas para los funcionarios de las corporaciones locales por la legislación básica del Estado. Se debe reparar en que estos premios no responden a una contingencia o infortunio sobrevenidos sino que se devengan simplemente por la extinción de la relación de servicio funcional cuando se alcanza la edad de la jubilación forzosa o la necesaria para obtener la jubilación anticipada. No se dirigen pues a compensar circunstancias sobrevenidas de la naturaleza de las que inspiran las medidas asistenciales --esto es, determinantes de una situación de desigualdad-- sino que asocian a un supuesto natural, conocido e inevitable de la relación funcional, por lo demás no específico del Ayuntamiento de Icod de Los Vinos sino común a toda la función pública, una gratificación.

Suponen, pues, una alteración del régimen retributivo de los funcionarios de las Administraciones Locales que carece de cobertura legal y de justificación y vulnera los preceptos invocados por el Gobierno de Canarias: los artículos 93 de la Ley reguladora de las bases del régimen local, 153 del Real Decreto Legislativo 781/1986, y 1.2 del Real Decreto 861/1986.

Así, pues, el motivo debe ser estimado y la sentencia recurrida anulada."

Esta sentencia que acoge la cuestión específica de la naturaleza de las ayudas por jubilación llega a la conclusión de que las mismas no son medidas asistenciales, y ello tanto para el caso de jubilación forzosa como cuando se alcance la edad necesaria para obtener la jubilación anticipada, considerando que en ambos casos no responden a una contingencia o infortunio sobrevenidas, sino que se devengan por la extinción de la relación del servicio funcional. Argumenta que no se dirigen a compensar circunstancias sobrevenidas de la naturaleza de las que inspiran las medidas asistenciales, sino que se asocian a un supuesto natural. Debido a dicha naturaleza concluye el alto tribunal que dichos premios o ayudas implican alteración del régimen retributivo de los funcionarios de las Administraciones Locales que carece de cobertura legal y vulnera los artículos 93 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 153 del Real Decreto Legislativo 781/1986, y 1.2 del Real Decreto 861/1986.

Esta misma corriente es la que reproduce y recoge la posterior STS número 347/2019 de 14 de marzo.

De la doctrina expuesta no puede sino desestimarse el recurso interpuesto, dado que conforme a la misma el premio previsto en el artículo 27 del Acuerdo Marco aludido no puede entenderse como mecanismo de racionalización de recursos humanos ni tiene carácter indemnizatorio por pérdida económica que supone la jubilación anticipada y ello porque conforme resulta de la jurisprudencia expuesta no compensa una circunstancia sobrevenida propia de las que se atienden acudiendo a medidas asistenciales determinantes de una situación de igualdad, sino que se vincula a un hecho natural, conocido e inevitable de la relación funcional común a toda la función pública.

Por lo demás las sentencias aportadas a título ilustrativo por la parte recurrente no resultan enteramente aplicables al caso, dado que las dictadas por los JCA número 3 y 6 de Murcia parten de un supuesto de hecho distinto; en éstas no se discute propiamente por el Ayuntamiento el derecho al abono de una indemnización sino únicamente si ésta es la correspondiente a la jubilación ordinaria o anticipada, concluyendo las mismas que la indemnización sería la prevista para ésta última. Y la aportada del JCA de Cartagena, si bien posterior a la STS de fecha 20 de marzo de 2018 antes trascrita no entra al estudio de dicha doctrina entre otras cosas porque la misma tampoco fue alegada por la administración demandada."

En el presente caso el Decreto impugnado de fecha 12 de marzo de 2019 desestima la petición de indemnización planteada por el recurrente por entender que la jubilación a la que éste

ha accedido no se considera jubilación anticipada sino jubilación ordinaria en el caso de policía local que reúna los requisitos de periodo cotizado.

Como quiera que sea en fase de contestación a la demanda el Ayuntamiento de Torre Pacheco incide en que la indemnización solicitada carece de cobertura legal en base a las sentencias del Tribunal Supremo que menciona. Sentencias que recogen la doctrina arriba trascrita y que como se refleja en la misma tanto para el caso de jubilación forzosa como cuando se alcance la edad para la jubilación anticipada, como sería el caso, la naturaleza de las ayudas por jubilación previstas no son medidas asistenciales, considerando que en ambos casos no responden a una contingencia o infortunio sobrevenidas, sino que se devengan por la extinción de la relación del servicio funcional.

Debe tenerse en cuenta que las sentencias aportadas a título ilustrativo, en concreto las dictadas por este Juzgado y del JCA número 2, 3 y 6 de Murcia, mismas que las aportadas en los procedimientos donde han recaído sentencias de fecha 18 y 26 de octubre de este año de este mismo Juzgado, parten de un supuesto de hecho distinto ya que en ellas el Ayuntamiento sí reconoce un derecho a la indemnización discutiéndose únicamente si se trataba de la correspondiente a la jubilación ordinaria o anticipada. En el caso de autos lo que se discute en origen es el derecho propio a reclamar dicha indemnización, indemnización que aunque se califique por la parte demandante como derecho adquirido, sea para el caso de jubilación ordinaria o anticipada es considerada por el alto Tribunal de naturaleza retributiva y por tanto contraria al régimen retributivo de los funcionarios de las Corporaciones locales que vulnera los artículos 93 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 153 del Real Decreto Legislativo 781/1986, y 1.2 del Real Decreto 861/1986.

Es cierto que la parte demandada ha cambiado el fundamento de la denegación de la indemnización solicitada recogida en el Decreto impugnado con la expuesta en fase de contestación oral a la demanda, pero ello no constituye propiamente desviación procesal sino cambio de motivos esgrimidos para la denegación, que pudiendo causar indefensión no se entiende que la origine ya que la parte demandante ha tenido oportunidad de alegar y de proponer la prueba que ha estimado pertinente a su derecho y tampoco ha concretado ninguna indefensión material sufrida por ello.

En cualquier caso, pese al cambio de fundamentación en la contestación a la demanda por parte del Ayuntamiento demandado y pese a que también es verdad que éste no ha iniciado procedimiento alguno para la revisión del acuerdo de referencia, a pesar de ello el criterio o pretensión de la parte recurrente no puede tener acogida ya que ello, como se

ha expuesto, sería ir en contra de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en las sentencias antes trascritas, lo que conduce en lógica consecuencia a la desestimación de la demanda.

TERCERO.- Conforme al artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, cada parte debe pagar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad en atención a las dudas de derecho que genera la doctrina jurisprudencial para la resolución objeto del presente litigio.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L O

DESESTIMO el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. [REDACTED] frente al Decreto de Alcaldía número 864/2019 del Ayuntamiento de Torre Pacheco de fecha 22 de abril de 2019 por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto por el recurrente frente al Decreto de 12 de marzo de 2019 por el que deniega la solicitud de indemnización por jubilación anticipada, resoluciones que confirmo y declaro conformes a derecho.

Cada parte abonará sus propias costas y las comunes lo serán por mitad.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso de apelación por razón de la cuantía.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.